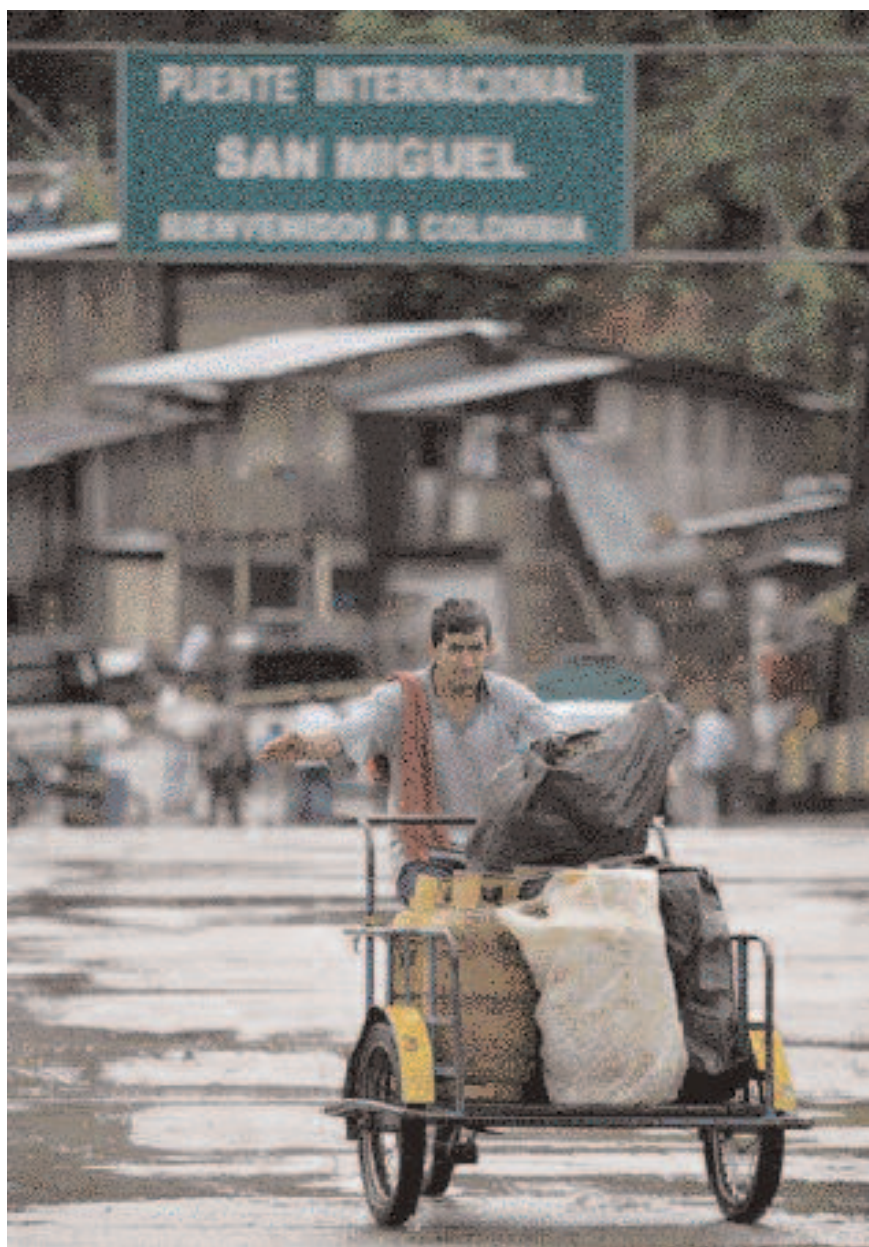


Subsidios ponen en peligro la dolarización

< POR JULIO OLEAS >



Agencia Prensa Independiente.

Los subsidios se han convertido en un problema gigantesco para la economía ecuatoriana. Mientras el único relativamente eficiente –el bono de desarrollo humano– tiende a disminuir, los demás se han incrementado hasta alcanzar dimensiones intolerables. Cuando Ecuador atravesó la peor crisis que recuerda su historia (1998), los subsidios se redujeron significativamente. Pero ingresos petroleros fáciles, con el telón de fondo de períodos presidenciales de dos años con ministros de Economía más inestables todavía, han alentado el incremento de transferencias monetarias ocultas que benefician a quienes menos necesitan del auxilio estatal.

El problema de los subsidios es tan agudo que, si no se lo corrige inmediatamente, puede significar el inicio del fin de la dolarización, tanto por el costo fiscal que representan (estimado en 25% del Presupuesto del Estado de 2006) como por las distorsiones asignativas e ineficiencias productivas que encubren. Uno de los supuestos fundamentales para consolidar la dolarización era –y sigue siendo– que la economía debía ordenarse lo más próxima al juego de mercados libres, transparentes y competitivos. Pero mientras se sigan manteniendo subsidios generales en sectores tan sensibles como el energético, el consumo doméstico y el productivo, la tendencia será la contraria.

El subsidio a los combustibles alienta el contrabando al por mayor y al por menor (como en la foto) a través de las fronteras.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya admitió en 2004 que los subsidios le costaron al Fisco \$ 1.400 millones anuales y, hace poco, informó que en 2006 costarán \$ 2.147 millones. Este crecimiento es insostenible, incluso en presencia de una abundancia petrolera que nadie puede tomar por segura. Más todavía, como las economías de los países vecinos son más ordenadas, en ellas los precios de los combustibles se encuentran más próximos a los determinantes del mercado, lo que produce diferenciales de precios con productos similares ecuatorianos altamente subsidiados, que alientan el contrabando y espersen corrupción por todos lados.

Los subsidios pueden ser un instrumento muy valioso para combatir la pobreza, pero en Ecuador se los ha pervertido de mala manera. Es muy improbable que el gobierno saliente asuma la responsabilidad de corregir este problema, pero el régimen entrante tiene la obligación impostergable de enfrentarlo con entereza y de inmediato. Menuda responsabilidad, dado el “costo” político implícito. Pero de no asumirla, dejará que la mecha del taco de dinamita siga consumiéndose, hasta que explote en la cara de la dolarización.

¿Sabían para quién trabajaban?

En 1999, cuando la tonelada métrica (TM) importada de gas licuado de petróleo (GLP) costaba \$ 168, el cilindro de uso doméstico de 14 kilogramos costaba \$ 2,1. En 2005, la misma tonelada se importó a \$ 546 (es decir, 3,25 veces más cara), pero el mismo cilindro costó \$ 1,6 (es decir, solo 75% de lo que costaba hace siete años). Esta paradoja solo es posible mediante un inmenso subsidio pagado por el Estado.

En 2005 el Estado importó 687.784 TM de GLP y pagó por ellas unos \$ 375 millones, pero las ventas internas de este producto, más otras 182.124 TM producidas en las refinerías de Petroecuador, habrían sido de solo \$ 96,4 millones (a \$ 0,11 cada kilogramo, es decir \$ 1,6 por cilindro de 14 kilogramos). Según el MEF, en 2005 el subsidio al gas ascendió a \$ 326 millones. Pero si se

imputa a la producción de GLP nacional un precio similar al del producto importado (lo que implicaría asumir que la competitividad de las refinerías nacionales es similar a la de las extranjeras), el subsidio total habría sido de \$ 382 millones, es decir \$ 56 millones más que la cifra oficial (Cuadro 1). Al inicio de 2006, el MEF estimó el subsidio al gas en \$ 337,1 millones, pero según información más reciente, terminaría costando \$ 434 millones.

Si los supuestos empleados en el Cuadro 1 son apropiados, entre 2000 y 2006 el Estado ecuatoriano habría subsidiado al consumo de GLP en unos \$ 1.500 millones (según las cifras

CUADRO 1
ESTIMACIÓN DEL SUBSIDIO AL GAS, 2000-2006
(MILLONES US\$)

	Valor ventas ¹	Costo mínimo de ventas ²	Diferencia	Subsidio ³	Discrepancia
	a	b	c=b-a	d	f=c-d
2000	71,5	167,1	95,6		
2001	76,0	150,0	73,9		
2002	78,9	205,8	126,9		
2003	83,7	279,9	196,2	208,6	-12,4
2004	89,7	367,8	278,1	290,6	-12,5
2005	96,4	478,5	382,1	326,0	56,1
2006*	102,5	508,8	406,3	337,1	69,2

1. TM TOTALES VENDIDAS X \$ 0,11 CADA KILOGRAMO.
2. TM TOTALES VENDIDAS X PRECIO DE IMPORTACIÓN.
3. CIFRAS OFICIALES DEL MEF, PRESENTACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO CENTRAL 2006. NO SE DISPONE DE CIFRAS ANTERIORES A 2002.
FUENTE: DIRECTORIO ENERGÉTICO DEL ECUADOR, 2006.

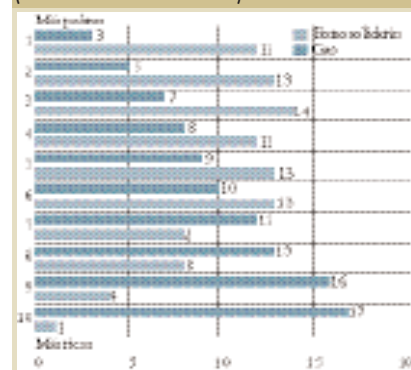
oficiales, entre 2003 y 2006 alcanzarían los \$ 1.162 millones). Y, dada la tendencia mundial de los precios de los derivados del petróleo, como el precio interno del GLP se mantiene “congelado” en \$ 0,11 por kilogramo, ese gasto viene subiendo año tras año.

El problema que plantea este aparente caso de irracionalidad colectiva supera la simple constatación del volumen de los recursos empleados. Estudios conducidos por el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) y el experto holandés Rob Vos concluyen que el 30% más rico de la población ecuatoriana se beneficia con el 46% del subsidio al gas, mientras que el 30% más pobre apenas recibe 15% del subsidio (Gráfico 1). Si los cálculos de los expertos son correctos, resulta que entre 2000 y 2005, con el congelamiento del gas de uso doméstico la gente con mayores ingresos habría recibido \$ 690 millones mientras que la de menores recursos \$ 225 millones.

Para que opere este gigantesco mecanismo de despilfarro el Estado importa y produce GLP (en 2005, 79% y 21%, respectivamente) que luego es envasado y distribuido por 12 empresas que reciben una utilidad garantizada (es decir, nunca pierden). En 2005, tres empresas (Duragas, AGIP y Congas) envasaron y distribuyeron 90,3% de los 10,25 millones de barriles de GLP (Gráfico 2).

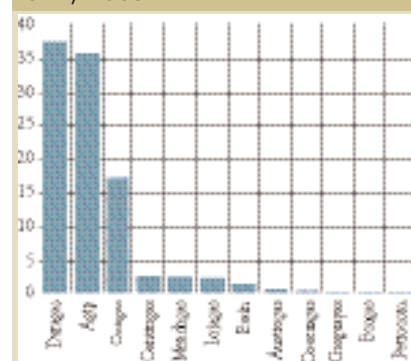
Como en Perú y Colombia el GLP sí se vende a precios reales, el diferen-

GRÁFICO 1
PARTICIPACIÓN DEL SUBSIDIO AL GAS Y DEL BONO SOLIDARIO (POR DECILES DE CONSUMO)



FUENTE: SIISE-STFS, INEC, ECV 1999 Y ROB VOS ET AL., 2002.

GRÁFICO 2
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE GLP: PARTICIPACIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN TOTAL, 2005



FUENTE: DIRECTORIO ENERGÉTICO DEL ECUADOR, 2006.

cial de precios –alrededor de \$ 9 por cada cilindro de 14 kilogramos– es un poderoso incentivo para el contrabando. Se estima que por Huaquillas fugan unos 20.000 cilindros de GLP cada mes, embarcados en Guayaquil, La Libertad y Santo Domingo de los Colorados. En el Norte el contrabando es tan organizado y rentable que la Policía es repelida con armas de fuego cuando trata de realizar pesquisas en cualquiera de los 200 pasos fronterizos. El Servicio de Rentas Internas (SRI) estima que durante los primeros cinco meses de 2006 fugaron 1,63 millones de barriles de GLP. Esto significa que uno de cada tres barriles envasados para consumo doméstico se pierde por las fronteras.

En 2004, cuando el subsidio al gas le costó al Estado \$ 290 millones, el malo de la película, el Fondo Monetario Internacional, sugirió su eliminación. Varios grupos de presión y movimientos sociales opusieron una cerrada resistencia. Pachakutik ofreció bloquear los caminos y derrocar al gobierno. Al parecer no sabían para quién trabajaban.

Una cuenta gigantesca que pagaremos todos

Uno de los mayores problemas con estos impuestos negativos es que suelen ser indeterminados, invisibles y difíciles de cuantificar. Este es el caso del formidable subsidio al consumo de electricidad, producto de la debilidad política para corregir las distorsiones institucionales del sector y de la desidia para actualizar las tarifas en función de los costos de producción y transmisión.

El subsidio eléctrico o déficit tarifario es equivalente a la diferencia entre los precios medios de venta de la energía facturados a los usuarios finales y la suma de los costos unitarios reales de compra más los costos del servicio de transmisión y más el valor agregado de distribución (VAD). Si el precio medio de venta al usuario final fue de \$ 0.08/kwh y la suma de costos unitarios, servicios de transmisión y VAD fue \$ 0.1/kwh, el déficit o subsidio sería de \$

0.02/kwh. El 13 de septiembre pasado, mediante ley reformativa a la de Régimen del Sector Eléctrico, el Congreso Nacional estableció que el MEF podía reconocer hasta \$ 950 millones por concepto de subsidios eléctricos.

Hasta el 13 de diciembre del año en curso el Consejo Nacional de Electrificación (Conelec) deberá informar al MEF los montos correspondientes al déficit tarifario de cada una de las empresas de distribución, para el período que va del 1 de abril de 1999 al 31 de diciembre de 2005. El MEF realizará un “cruce de cuentas” con las deudas que mantienen las empresas del sector con el Estado y Petrocomercial, las mismas que deberán ser calculadas por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace): el déficit tarifario acumulado por las distribuidoras se considera un activo que puede ser neteado con los pasivos arrastrados con el Estado y con Petrocomercial.

El resultado de este cruce de cuentas alimentará un fideicomiso mercantil, cuyo constituyente será el MEF, para pagar las deudas vencidas de las empresas de distribución con (1) las empresas de generación por compra de

¿No habría sido más sencillo establecer tarifas reales para liquidar el déficit del sector eléctrico?

energía y transporte, (2) las distribuidoras con generación no escindida y (3) Transelectric. Aparentemente, este fideicomiso solo cobrará vida si el déficit tarifario es mayor que los adeudos de las empresas de distribución con el Estado (directamente o por medio de Petrocomercial). Si este fuere el caso, la liquidación de dicho déficit finalmente –y más allá de todos los enredos contables, casos especiales como el de Emelec y condonaciones generalizadas de intereses– solo será posible recurriendo a los recursos del Estado, es decir de todos los ecuatorianos, conglomerado que no es equivalente –ni cualitativa ni cuantitativamente– a los beneficiarios de las tarifas deficitarias. ¿No habría sido más sencillo establecer, desde un inicio, tarifas reales?

Este subsidio ha servido, además, para encubrir la ineficiencia y corrupción de las empresas distribuidoras. La verdad es que las pérdidas de energía en ellas son, año tras año, superiores a 22%, como ya lo hizo notar el Banco Mundial en su



Agenda Económica y Social del Nuevo Milenio para el Ecuador. La reciente reforma a la Ley Eléctrica poco o nada contribuirá a solucionar los problemas de fondo, pues mantiene en la voluntad del Ejecutivo la facultad de seguir arbitrando rentismos e ineficiencias por medio de sus representantes en el Fondo de Solidaridad, en el Conelec y en el Cenace.

Falsa opulencia y corrupción

El MEF ha informado que en 2006 el subsidio para las gasolinas (extra y súper) costará \$ 570 millones y el del diesel, \$ 1.142 millones. En 2005 el subsidio al diesel habría costado \$ 796 millones. Y en 2004, \$ 400 millones para las gasolinas y otros \$ 666,5 millones para el diesel. Al preparar esta nota no se pudo conocer cuánto habría costado subsidiar las gasolinas en 2005, aunque fuentes bien informadas afirmaron que solo el diferencial de importaciones de naftas superó los \$ 37 millones. En todo caso, la suma de todos estos valores, correspondientes al período 2004-2006, arroja una cifra de \$ 3.611,5 millones.

Como los precios internos de estos combustibles están controlados, no se determinan por las condiciones reales del mercado. En 2005, en Ecuador el precio del galón de gasolina corriente era de \$ 1,5, mientras que en Colombia era de \$ 2,5 y en Perú de \$ 4,4. Asimismo, el precio del galón de diesel en Ecuador era de \$ 0,9, mientras que en Colombia era de \$ 1,9 y en Perú de \$ 3. A diferencia de Perú, Ecuador y

Colombia tienen reservas importantes de petróleo y pueden manipular los precios. En consecuencia, las condiciones del mercado peruano serían más próximas a las condiciones reales del mercado internacional.

Si en Ecuador el propietario de un automóvil consume 40 galones de gasolina cada mes, estaría recibiendo del Estado ecuatoriano un premio implícito de \$ 40, si se compara con el precio colombiano, y de \$ 116, si se compara con el precio peruano. En el caso de un propietario de un camión con motor a diesel que, digamos, consume 100 galones al mes, el premio sería de \$ 100 si se coteja con el precio colombiano y de \$ 210 si se refiere al precio peruano.

Puesto que solo la gente con ingresos medios y altos puede poseer un automóvil, el subsidio a la gasolina -en consecuencia- beneficia preferentemente a esos segmentos de la población y abre la brecha de ingresos reales entre pobres y ricos. Más todavía, incentiva a los más pudientes a comprar más automóviles y con motores más grandes, que consumen más combustible, pues en términos relativos resulta conveniente hacerlo. Lo que también contribuye a debilitar el saldo de la cuenta corriente.

Si la inmensa cantidad de recursos necesaria para financiar este subsidio proviene de los ingresos adicionales del petróleo, la necesidad de eliminarlo es mayor, pues estamos consumiendo nuestro capital natural (el petróleo) en perjuicio de las generaciones futuras que ya no tendrán los recursos que hemos dilapidado en esta coyuntura favorable. Las cifras de consumo de gasolina y diesel de los últimos años confirman este irresponsable despilfarro, exacerbado más aún por la necesidad de alimentar la generación termoeléctrica (Cuadro 2).

Pero hay más. Los diferenciales de precios alientan una fuga de combustibles que, según el SRI, durante los

cinco primeros meses de 2006 ya alcanzaría a 1,53 millones de barriles de gasolina de alto octanaje y a 2,8 millones de barriles de diesel. De hecho, los incentivos que presenta la coyuntura propiciada por el facilismo petrolero y la irresponsabilidad política son tan poderosos que se ha encontrado embarcaciones de bandera ecuatoriana repletas de diesel tan lejos como en Guatemala. Según indagaciones del suplemento *Blanco y Negro* (2 de septiembre de 2006), como la Ley de Hidrocarburos no penaliza estos ilícitos, hasta un 80% de transportistas estarían involucrados en la fuga de combustibles. Si se toman como referencia los precios del Perú y se aceptan como válidas las estimaciones del SRI, entre enero y mayo de 2006 el negocio de contrabando de diesel y gasolina habría movido un monto total de \$ 434,8 millones.

En la “política” social, cada vez menos

Si se los analiza como transferencias monetarias, los subsidios serían similares a los impuestos, pero de signo negativo. Por esta razón, pueden servir como instrumentos de política social para aliviar la pobreza y la desigualdad.

El Bono Solidario creado en Ecuador en 1998 para compensar mediante transferencias en efectivo a la población más pobre -por la supuesta eliminación de los subsidios al gas, electricidad y combustibles- difícilmente calificaba como política de protección social. En abril de 2003 se lo rediseñó con el nombre de Bono de Desarrollo Humano (BDH), unificando el “bono solidario” y la “beca escolar” y proponiendo incentivos para alentar la responsabilidad y la participación activa de los padres en el cuidado de la salud y educación de sus hijos. En agosto de 1999 este programa había entregado subsidios a 1,33 millones de beneficiarios y en 2003 su focalización los redujo a 1,04 millones.

Mediante ayudas monetarias a los hogares más vulnerables del país, el BDH trata de aliviar la pobreza, pero también trata de inducir conductas res-

CUADRO 2
OFERTA DE GASOLINA Y DIESEL, Y CRECIMIENTOS ANUALES (2000-2005)

	Gasolina ¹			Diesel ¹				Crecimiento ²		
	Súper	Extra	Total	1	2	Premium	Total	Gasol.	Dies.	PIB
2000	1,0	10,9	11,9	0,3	14,5	0,8	15,6	11,6	13,1	2,8
2001	1,4	11,2	12,6	0,4	16,4	0,4	17,2	5,6	9,9	5,3
2002	2,2	10,5	12,7	0,3	16,8	0,4	17,5	0,7	1,7	4,3
2003	2,4	10,0	12,5	0,3	17,2	0,1	17,5	-1,5	0,3	3,6
2004	2,7	10,5	13,2	0,8	17,8	0,6	19,2	5,7	9,6	7,7
2005	3,0	11,0	13,9	0,3	20,8	0,0	21,1	5,7	10,0	3,9

1. MILLONES DE GALONES.

2. TASAS DE VARIACIÓN ANUAL, EN PORCENTAJES.

FUENTE: DIRECTORIO ENERGÉTICO DEL ECUADOR 2006 Y BCE.

ponsables y participativas de las cabezas de esos hogares. Su relativo éxito –en la actualidad es el programa social de mayor alcance en el país– se basa en su Sistema de Selección de Beneficiarios, que también sirve como instrumento de calificación para focalizar otros programas.

Según las cifras del MEF, las transferencias y subsidios del gobierno otorgados a través de Bienestar Social bajaron de \$ 197 millones en 2003 a \$ 192 millones en 2006.

“Nadie quiere limosnas –afirma **Carlos Jara**, consultor del Frente Social ecuatoriano, comentando el alcance que debe darse al BDH–; las familias, los ancianos, los pobres del campo y la ciudad, deben ser libres y poder tener acceso a recursos financieros, a activos, a información y principalmente a capacidades, para generar sus propios ingresos, para realizar lo que la gente puede

Cada agricultor de EEUU recibe un promedio de \$70 en subsidios por día y a cada hogar del país los subsidios agrícolas le cuestan \$146 anuales, una cifra minúscula.

hacer”. Pero el BDH corre grave riesgo de convertirse en limosna, si no se lo integra en programas más amplios de desarrollo social. De hecho, ya ha sido utilizado como mecanismo para captar simpatías populares, como cuando el tristemente célebre Coronel **Lucio Gutiérrez** ofreció al inicio de su corto mandato aumentar el Bono Solidario y aprobar nuevas leyes para acrecentar las pensiones de los jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

A partir de esas maniobras neopopulistas, las transferencias y subsidios del gobierno al IESS subieron de \$ 166,8 millones en 2003 hasta \$ 343 millones en 2006. Siempre es más cómodo echar mano al dinero fácil del boom petrolero y de los impuestos, que modernizar la seguridad social, definir claramente los derechos de propiedad de los afiliados y arreglar sus cuentas. Y también dan más *rating* noticias de ancianos crucificados o desangrados que el seguimiento y denuncia sistemáticos del descalabro del IESS.

SUBSIDIOS Y LIBRE COMERCIO: LA DIFERENCIA ENTRE DECIR Y HACER

Un subsidio a la exportación es una transferencia monetaria realizada por un país a una empresa o un individuo que venden un bien en el extranjero. Esta práctica perjudica a los consumidores del país exportador e infla el gasto público, pero beneficia a los productores. Los empresarios y trabajadores que generan un producto que también se importa subsidiado sufren un impacto negativo, pues éste ingresa al mercado interno a menor precio. Y por la misma razón, los consumidores del país importador resultan beneficiados.

Según **Aglieto Aldo Guadagni**, economista de la CEPAL, los subsidios agrícolas en los países desarrollados superan los \$ 300.000 millones anuales, es decir más de seis veces la ayuda directa otorgada a los países pobres. En EEUU el 21% y en la Unión Europea (UE) el 35% de los ingresos de los agricultores provienen de ayudas monetarias otorgadas por sus gobiernos. Junto a las barreras arancelarias contra productos agrícolas (arroz, azúcar, algodón, maíz, leche), los subsidios en el Norte ocasionan, según Guadagni, pérdidas anuales para los países en desarrollo equivalentes a \$ 40.400 millones.

Los productos más subsidiados son arroz, azúcar, lácteos y carnes (*Gráfico*). Estudios de la OCDE y el Banco Mundial dan cuenta de que cada una de las 1,6 millones de vacas del Japón recibe \$ 11,86 diarios. Esto significa que el gobierno japonés subsidia a sus ganaderos con \$ 18,9 millones por día (la bicocha de \$ 6.926 millones por año). Según Carlos Jara, mientras en Europa una vaca recibe \$ 3 de subsidios por día, más de 7,4 millones de ecuatorianos intentan sobrevivir con menos de \$ 2 cada día... “No nacieron pobres por fatalidad”, afirma.

La estructura de subsidios en el



Agencia Prensa Independiente.

Norte permite a Finlandia producir remolacha cerca del círculo polar ártico, mientras los pobres pero eficientes productores azucareros de los países tropicales no pueden competir contra esas ayudas y se limitan a sobrevivir. Esta política contradice abiertamente la doctrina de las ventajas comparativas formulada por el economista inglés **David Ricardo** y usada por los países industrializados durante 200 años como justificación “científica” de las bondades del libre comercio.

Entre 2001 y 2002, 25.000 algodoneros de EEUU recibieron subsidios por \$ 4.000 millones para producir el famoso *Cotton USA* por un valor comercial de \$ 3.000 millones. Los precios al productor en ese país fueron 91% más altos que el precio en el mercado mundial. Al pagar la ineficiencia de los algodoneros norteamericanos, la política de ese gobierno deprime los precios internacionales, en perjuicio, entre otros, de 11 millones de productores de África Occidental (como los de Malí o Burkina Faso).

La *Farm Security and Rural Investment Act (Farm Bill)*, aprobada en mayo de 2002 y vigente hasta 2007, tendría un costo de \$ 248.600 millones, lo que significa un incremento de los subsidios al sector agrícola norteamericano de 80% en relación a la *FAIR Act* de 1996-2001. Trigo, maíz, arroz, sorgo, cebada forrajera, avena, soya, algodón, productos lácteos, maní y azúcar son los más favorecidos. La *Farm Bill* limita a \$ 360.000 el beneficio máximo que podría recibir cada granja, pero el conjunto de excepciones establecidas anularía ese límite, en beneficio de los agricultores más grandes.

¿Por qué se los mantiene?

En EEUU, cada agricultor recibe un promedio de \$ 70 en subsidios por día. Según el Instituto Cato (<http://www.elcato.org/>), a cada hogar norteamericano los subsidios agrícolas le cuestan \$ 146 anuales, cifra minúscula si se la compara con el ingreso medio de una población cuyo PIB por habitante por hora es de \$ 35,42 (según estudios de la Universidad de Gro-

ningen). Con el trabajo de dos o tres horas cada año, cada norteamericano habría cumplido con la cuota exigida por el Tío Sam para beneficiar a sus agricultores.

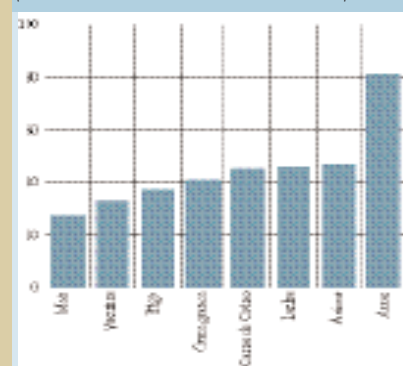
Quienes apoyan el tratado de libre comercio entre EEUU y Ecuador sostienen que se lo debe aprobar sin discutir el tema de los subsidios. Varios productos “sensibles” de la agricultura ecuatoriana seguirían siendo no competitivos aun si EEUU elimina toda ayuda a sus agricultores. Y, en consecuencia, mantener las protecciones para maíz amarillo, arroz, soya o pollo sólo causaría daño. Daño para los consumidores ecuatorianos, que no podrían beneficiarse de los subsidios norteamericanos. Los precios ecuatorianos por tonelada métrica de maíz amarillo, soya, pollo y huevos es de \$ 217, \$ 284, \$ 2,185 y \$ 1.295, respectivamente, mientras que los de EEUU, sin los subsidios, seguirían siendo menores: \$ 131, \$ 278, \$1.168 y \$1.057, respectivamente. Visto desde el lado de la demanda, el argumento parece impecable.

Desde el lado de la oferta, los subsidios de los países desarrollados han contribuido a la sobreproducción mundial de ciertos bienes agrícolas, deprimiendo los precios y fomentando la competencia desleal con los productores del Tercer Mundo. En los países industrializados las ayudas económicas a los agricultores son costosas e ineficientes, y no solo se las mantiene por la fuerte presión política ejercida por ellos sobre sus gobiernos. Las razones que las justifican –según el gobierno de EEUU– radican en la necesidad de proveer un ingreso adecuado para sus agricultores, en la seguridad alimentaria del pueblo norteamericano, en la necesidad de mantener una posición internacional competitiva y en cuidar una industria viable de insumos.

Lo que los países del Norte quieren exportar a los del Sur son los excedentes producidos por sus subsidios, es decir lo que no alcanzan a consumir casa adentro. Pero en el Sur, la necesidad de corregir los desequilibrios de

la cuenta comercial norteamericana pondría en grave riesgo a extensos sectores agrícolas, a menos que, contra todo sentido común, sean capaces de “reconvertir” sus formas de vida –y hasta su cultura– y encontrar ocupación en algo para lo que sí serían competitivos, pese al proteccionismo del Norte.

SUBSIDIOS POR PRODUCTOS, EN PAÍSES INDUSTRIALIZADOS, 2000-2002
(COMO % DE INGRESOS DEL PRODUCTOR)



FUENTE: OCDE.

En los países subdesarrollados es imposible replicar una ayuda de la magnitud de la *Farm Bill* de 2002 (equivalente aproximadamente al PIB ecuatoriano de 2005, pero multiplicado por siete). Así como es imposible que la comunidad internacional obligue a Japón a dejar de producir el arroz más caro del mundo. Sería suicida, desde la perspectiva de la seguridad alimentaria, correr el riesgo de tener que sobrevivir a base de algas, como debieron hacerlo luego de la Segunda Guerra Mundial.

Atentan contra el desarrollo sostenible

El desacuerdo sobre los subsidios agrícolas llevó al fracaso a la Ronda de Desarrollo de Doha de la OMC. En junio pasado, en Ginebra, la UE, Japón, EEUU, Australia, Brasil e India no pudieron superar sus diferencias, por lo que los subsidios agrícolas ya no terminarán, como se había previsto, en 2013. Los países en desarrollo piden reducirlos en los países desarrollados y además piden una liberalización asimétrica (fuer-

te reducción de la protección en frontera y ayudas agrícolas de los países desarrollados, y disminución más suave y diferenciada de la protección en frontera de los países en desarrollo). Pero EEUU considera que la mejor forma de promover el desarrollo es abrir las fronteras de todos los países a todo tipo de productos, sin recortar sensiblemente la ayuda a sus agricultores.

Como operan en la actualidad, en los países desarrollados los subsidios a la agricultura tienen una clara intencionalidad crematística y son irreconciliables con objetivos ambientalistas. Promueven la sobreexplotación de las tierras agrícolas, aceleran la erosión de la superficie del suelo, contaminan por el uso de fertilizantes sintéticos y pesticidas, y potencian la liberación de gases que aumentan el efecto invernadero. Aplicados a la industria pesquera, pueden ser una causa importante de degradación de los recursos marinos, pues alientan la sobreexplotación al apoyar la expansión de las flotas, si al mismo tiempo no alientan prácticas sostenibles.

EEUU es responsable de 25% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, mientras representa apenas 4% de la población mundial. “Debemos luchar por terminar con los subsidios”, aconseja **Joke Waller Hunter**, director de Ambiente de la OCDE, y añade que “sería un gran paso incrementar la ayuda agrícola basada en el tamaño de los predios y no en los niveles de producción”. En la mayoría de países industrializados las fuentes subterráneas de agua están contaminadas por el uso de agroquímicos. De continuar la política actual, se estima que en 2020 la descarga de nitrógeno procedente de la agricultura en los cursos de agua será 25% mayor. Pero este es un problema de largo plazo que no interesa a las transnacionales de la agricultura, más ocupadas en incrementar sus ganancias en el corto plazo. 